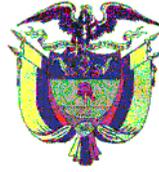


**REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO QUINTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS  
LABORALES DE MEDELLÍN**

Medellín, abril doce (12) de dos mil veintitrés (2023)

Dentro del presente proceso ejecutivo laboral de única instancia, promovido por PROTECCION S.A en contra de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RC S.A.S, la apoderada de la parte ejecutante presentó recurso de reposición el día 29 de septiembre de 2022, a través del correo electrónico institucional del Despacho, contra el auto que negó el mandamiento de pago, proferido el día 27 de septiembre de 2022, publicado en estados el día 28 de septiembre de 2022, arguyendo que si se cumplió por parte de PROTECCIÓN S.A, en cuanto a realizar las gestiones por las cuales se denegó el mandamiento de pago, las cuales fueron enviadas al correo del demandado, en este caso a la sociedad demandada, requerimientos que se hicieron a través de la aplicación LITI SUITE, (<https://www.litigando.com/Liti/LitiSuite/index.jsp>) poniendo en conocimiento del aquí demandado el resultado de dichas acciones, así: - El día 02 de mayo de 202, a través de correo electrónico, con el siguiente reporte: "SE ENVIA CORREO ELECTRONICO AL APORTANTE CON LA NOTIFICACION DE INICIO DE DEMANDA, ENTREGA EXITOSA. Que, Con las gestiones aportadas anteriormente, se evidencia que en efecto la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A si dio cumplimiento con los requerimientos contemplados en los artículos 9 y 12 de la resolución 2082 del 06 de octubre de 2016.

Afirma que el aquí demandado tiene pleno conocimiento de la deuda en curso, adicional a ello si con la demanda se están aportando estos documentos para obtener el pago de unos aportes pensionales dejados de realizar por parte del empleador, como es de su entero conocimiento, es apenas natural que se tenga en cuenta y se dé aplicación al principio constitucional de la buena fe, el cual ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional quien en Sentencia C-544 de 1994, se refirió a la misma en los siguientes términos: "Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera, la consagración de la obligación de actuar de buena fe, obligación que se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. La segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los particulares en todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas." Por lo anterior, solicita se revoque la decisión de negar el mandamiento de pago deprecado.

En el caso de marras, conforme a la Resolución N° 2082 de 2016, conviene traer a colación que, para que las Administradoras de Fondos de Pensiones puedan reclamar mediante acción ejecutiva judicial el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, deben haber adelantado un aviso de incumplimiento encaminado a incentivar el pago voluntario de las contribuciones parafiscales adeudadas, el cual consiste en que una vez se realice la liquidación de los aportes en mora y los correspondiente intereses moratorios, en un plazo que no podrá ser superior a quince (15) días, deberá remitir un primer requerimiento al empleador moroso, informándole el estado de mora y la liquidación realizada, sino hay respuesta, o la misma no acredita el pago o liquidación parcial, deberá remitirse un segundo requerimiento con la liquidación de los aportes en mora e intereses moratorios, en un términos entre los treinta (30) días siguientes al primer contacto, sin superar los cuarenta y cinco (45) días, a lo que tampoco da cumplimiento la entidad.

Es así como debe tenerse en cuenta que la constitución de los títulos ejecutivos por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones es una excepción a la regla general sobre que el título ejecutivo sea un documento proveniente del deudor, en la medida que la ley, excepcionalmente faculta a las AFP a elaborar una liquidación que prestaría mérito ejecutivo; empero, debe garantizarse que en la constitución del mismo no se incurra en arbitrariedades o abuso del derecho, cumpliéndose con los procedimientos y reglas establecidas para la elaboración del título de ejecución, porque, de lo contrario, se afectaría la validez o aplicabilidad del mismo.

Es así como los artículos 12 y 13 de la Resolución 2082 de 2016, expedida por la UGPP en ejercicio de las atribuciones legales que le fueron asignadas en el parágrafo 1 del artículo 178 de la ley 1607 de 2012, señalan:

*“ARTÍCULO 12. ACCIONES PERSUASIVAS. Una vez las Administradoras constituyan el título que presta mérito ejecutivo, deben contactar al deudor como mínimo dos veces. El primer contacto lo deben realizar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la constitución y firmeza del título ejecutivo, según el caso, y el segundo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, sin superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3 “*

*“ARTÍCULO 13. ACCIONES JURÍDICAS. Vencido el plazo anterior las administradoras contarán con un plazo máximo de cinco (5) meses para dar inicio a las acciones de cobro coactivo o judicial, según el caso”.*

De lo anterior puede afirmarse que las acciones persuasivas que se realizan con posterioridad a la elaboración del título, no son elementos constitutivos del mismo, en tanto, se itera, estas deben ser realizadas con posterioridad a su constitución.

Empero, cuando se trata de la exigibilidad de los mismos, ello sí depende de la realización de las acciones persuasivas de que habla la normatividad transcrita, pues la misma es clara en señalar el

05001410500520220036600

Niega Recurso

deber de contactar al deudor mínimo dos veces después de contar con el título ejecutivo, y solo vencido el plazo que se le otorga al moroso para pagar en estas acciones persuasivas, comienza a contar el plazo máximo de cinco (5) meses para dar inicio a las acciones de cobro judicial.

Ahora bien, se tiene que el momento procesal oportuno para aportar las constancias de realización de las acciones persuasivas era con la presentación de la demanda ejecutiva, y no con el recurso interpuesto contra el auto que negó el mandamiento, pues al momento de proceder con el estudio de la demanda presentada se debe verificar, la exigibilidad del título que en estos casos está dada, entre otros, por la realización de las acciones persuasivas posteriores; lo que brillan por su ausencia en los anexos del escrito genitor.

Corolario con lo expuesto, considera esta Agencia Judicial que se está de cara a la carencia de uno de los requisitos formales del título complejo, lo que conlleva a concluir que el título ejecutivo presentado por la parte ejecutante no contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Como consecuencia de lo anterior, no se repone la decisión.

NOTIFÍQUESE

**LUIS DANIEL LARA VALENCIA**  
**Juez**

**Firmado Por:**  
**Luis Daniel Lara Valencia**  
**Juez Municipal**  
**Juzgado Pequeñas Causas**  
**Laborales 05**  
**Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8861dc027b38403a6493dc8de010b46a33af6f587760d44c1a82870c51cf496b**

Documento generado en 13/04/2023 10:40:43 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**